

Habitar la ruralidad argentina en pandemia: aislamiento social y desigualdades

Laura Noemí Alcoba
María Florencia Chávez
María Noelia Salatino
María Belén Quiroga Mendiola
María Soledad González Ferrín
Leticia Gonzalez

Introducción

El 20 de marzo de 2020 se estableció en todo el territorio argentino el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)³⁶ como medida de protección de la salud pública frente a la pandemia de COVID-19. La principal estrategia adoptada buscaba desacelerar la curva de contagios, con el propósito de preparar al sistema de salud con equipamientos y capacidades humanas que evitaran el colapso ante el ascenso vertiginoso de demandas, tal como venía sucediendo en otros países del mundo. Si bien aparecía como medida provisoria, el desarrollo de la pandemia impulsó a prorrogar esta medida, acompañada de licencias laborales para personas pertenecientes a grupos de riesgo y el cese de la actividad educativa en todos los niveles y en todo el país³⁷.

El ASPO encontró a Argentina en una situación económicamente crítica. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), un 35% de la población, es decir 14 millones de personas, se encontraba por debajo de la línea de pobreza y un 8 % debajo de la línea de indigencia

36 Se emitió un Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia 297/2020 sobre el ASPO, que determinaba permanecer en sus domicilios habituales, con la excepción de desplazarse en caso de desarrollar actividades esenciales o por motivos de abastecimiento de las familias. Se estableció una primera disposición por 15 días de duración, luego prorrogada sucesivamente por continuidad de la emergencia epidemiológica.

37 Resolución Ministerio de Educación de la Nación 105/2020

en 2019. Estos índices se incrementaron a inicios del año 2020. Con la pandemia, esta situación de emergencia se agudizó. Es por ello que la política sanitaria fue acompañada de una serie de medidas de asistencia social y económica, con el objetivo de aminorar los impactos en el poder adquisitivo de las familias perjudicadas, al suspenderse gran parte de la actividad económica.

Entre las medidas más significativas de asistencia directa, se pueden mencionar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)³⁸, el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)³⁹ y una línea de créditos a tasa cero⁴⁰. También, se restringió el aumento en los precios de los servicios básicos y en las subidas de los alquileres, y se estableció la emergencia ocupacional -comúnmente denominada doble indemnización en caso de despido- como medidas indirectas de contención de la economía familiar.

Las grandes zonas urbanas fueron las principales afectadas en términos de cantidad de contagios. En las ciudades más pequeñas y comunidades aisladas, donde habitan las familias rurales, si bien no se registraron en principio grandes contagios, sí se observaron una serie de conflictos derivados de decretar el aislamiento obligatorio. Esta situación, sobre todo, puso de manifiesto e hizo aún más visibles diversas desigualdades estructurales de larga trayectoria que afectan zonas rurales y aisladas.

Con el objetivo de conocer cómo las familias rurales estaban siendo impactadas por la pandemia y aislamiento, se llevó adelante un relevamiento, que consistió en una encuesta a referentes de distintas localidades y comunidades rurales, excluyendo a los grandes centros

38 Prestación monetaria excepcional destinada a las personas desocupadas o que trabajan en la economía informal, monotributistas de las categorías más bajas, trabajadoras/es de casas particulares y personas que cobran la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo. Puede cobrarlo una sola persona por grupo familiar, siempre que no haya integrantes empleadas/os en relación de dependencia, autónomas/os, jubiladas/os, pensionadas/os. Más información: <https://www.argentina.gob.ar/>

39 Entre otros beneficios, este programa incluía el pago de un Salario Complementario, por parte del Estado Nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado. Más información: <https://www.argentina.gob.ar/> Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

40 Es un crédito especial para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) y trabajadoras o trabajadores autónomos que busca acompañar su proceso de recuperación productiva. Quienes soliciten los créditos a tasa 0 % tendrán 6 meses de gracia para el primer pago y la devolución se realizará en 12 cuotas fijas sin intereses (El Cronista, 2021).

urbanos. El propósito de dicha investigación fue contar con información rápida que permitiera dar cuenta de la situación y poder realizar propuestas de trabajo e intervención⁴¹. De allí que no fue el objetivo principal lograr representatividad estadística.

Los resultados y el análisis del mencionado relevamiento fueron publicados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con el nombre de “Aislamiento social y pandemia en la ruralidad argentina: una aproximación a la situación de familias y jóvenes” en el año 2021. Las cuestiones sobre las que se indagó fueron: presencia de contagios; gestión de la pandemia y acatamiento del aislamiento social; acceso al sistema de salud, alimentos y otros bienes de primera necesidad; continuidad y acceso a la educación; impacto de la pandemia y el ASPO en actividades económicas, productivas y comerciales y su repercusión en el empleo; afectación en los ingresos familiares y acceso a la asistencia económica; vínculos familiares y sociocomunitarios. Por último, se relevaron percepciones, sensaciones o reflexiones de las y los referentes entrevistados.

El presente artículo sintetiza los principales resultados en el marco de dicho estudio, con énfasis en las desigualdades espaciales que supone el habitar la ruralidad en Argentina, profundizadas en un contexto de emergencia social.

41 Este relevamiento fue realizado en el marco del proyecto especial “Estrategias y prácticas innovadoras para el arraigo de las familias agropecuarias y la integración de jóvenes rurales”, perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

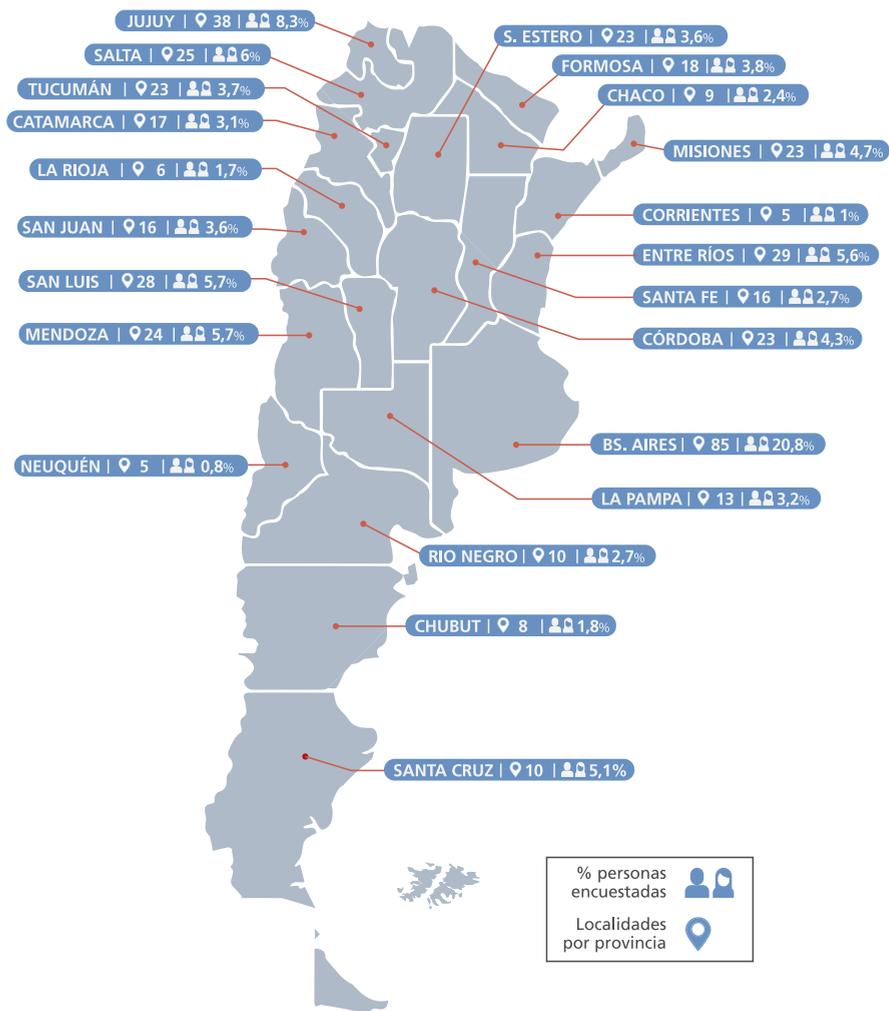
Aspectos metodológicos y características generales de la población estudiada

Para llevar adelante este trabajo, se diseñó un instrumento semiestructurado de relevamiento que fue enviado por correo electrónico y redes sociales⁴². Los destinatarios eran referentes de diferentes localidades, géneros, edades, roles, funciones, pertenecientes tanto al ámbito público como privado. La presencia territorial nacional del instituto que impulsó este relevamiento permitió una amplia cobertura geográfica. Se obtuvieron un total de 786 respuestas de referentes de todas las provincias (a excepción de Tierra del Fuego), abarcando más de 450 localidades y parajes rurales del país. Los datos por macrorregión arrojaron los siguientes resultados: un 12 % de la Región Noreste (NEA); 25 % de la Región Noroeste (NOA); 36 % de la Región Pampeana; 17 % de la Región de Cuyo y 10 % de la Región Patagonia (ver *Figura 1*) (Alcoba *et al.*, 2021).

Fueron diversas las actividades donde se desarrollan las y los referentes involucrados: un 41 %, en la administración pública y organismos descentralizados; 28 % dentro del sistema educativo; 28 % se desempeñaba en la actividad productiva; 13 % eran referentes de organizaciones sociales y un 8 % pertenecía al sistema de salud. Cabe aclarar que, algunas y algunos de los encuestados seleccionaron más de una opción, combinando su actividad productiva con alguna función, generalmente como referente de organización social, o alternando trabajo y estudio.

42 La carga se habilitó durante 14 días (entre el 26 de mayo y el 6 de junio de 2020).

Figura 1. Cantidad de localidades y parajes con respuestas y porcentaje de personas encuestadas, por Provincia



Fuente: Elaboración propia.

Además de la representatividad a nivel territorial, se privilegió la aplicación equitativa del instrumento en relación con el género, franjas etarias y representantes de pueblos originarios. El rango etario predominante fue de 40 años, mientras que la mayoría se encontraba entre los 25 y 65 años. No obstante, se consiguió la participación de personas más jóvenes y de adultos mayores. Del total de personas, el 58 % (450) fueron mujeres y el 42 % (333) varones. Solo un 0.4 % se autopercebió con identidad diferente a mujer y varón.

Finalmente, el 9 % (72) de las personas se reconocen integrantes de algún Pueblo Indígena Originario. Entre estos: Atacama, Ava Guaraní, Chaná, Chapaco, Diaguita, Guaraní, Huarpe, Kolla, Mapuche, Mocoví, Omaguaca, Qom, Quechua, Quilmes, Ranquel, Tehuelche, Wichí y Tobas. Un dato a destacar, más de la mitad de las personas que se reconocen como pertenecientes a pueblos originarios se concentran en la región del NOA, incluye las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

Desigualdades, pandemia y ruralidad

En el 2020 Argentina atravesaba una situación económica y social muy compleja. Las personas y familias presentaban dispares condiciones laborales, habitacionales, sanitarias y alimentarias para cumplir con el pedido de “quedarse en casa” que exigía la coyuntura de pandemia a nivel mundial. Diferentes investigaciones (entre ellas Abeles, Pérez y Porcile, 2020; Kessler, 2020) son coincidentes en señalar el agravamiento de las condiciones estructurales de los sectores sociales más postergados como resultado de dicho acontecimiento. En la ruralidad se pusieron en tensión problemáticas históricas vinculadas tanto a aspectos de infraestructura y de servicios, como de vulnerabilidad social y del sistema productivo. Entre otras cuestiones: la deficiente infraestructura comunicacional; la informalidad de algunos sectores productivos; los obstáculos para acceder al sistema financiero, educativo y a las tecnologías; los problemas de empleo, como la desocupación, la informalidad y la precariedad de los trabajos, entre otras problemáticas.

Estas cuestiones responden a desigualdades estructurales de larga data en la ruralidad argentina que nos remontan al proceso de constitución del país. Desde su conformación, la República Argentina ingresó al

mercado mundial como abastecedora de materias primas, supeditada a la dinámica impuesta por la división internacional del trabajo y los intereses de acumulación de capital por parte de Inglaterra como potencia hegemónica. Esta configuración implicó una incipiente apropiación del suelo por parte de una reducida élite que priorizó la producción extensiva y escasa empleabilidad. Como consecuencia de esta distribución de la tierra y la producción, la población rural en Argentina fue siempre inferior a los porcentajes que presenta en general la región de América Latina (Azcu y Ameghino, 2011 y 2014; Arceo, 2003; Rofman y Romero 1997 [1973]). En la actualidad, según datos oficiales (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2010), la población rural en el país alcanza un 8.9 % mientras, según estadísticas del Banco Mundial (2021) la región en promedio un 18.7 %. No obstante, es común la tendencia decreciente de población que permanece en la ruralidad en el conjunto de países.

El proceso de despoblamiento rural registrado en Argentina está asociado con el fenómeno de homogeneización del campo de las últimas décadas, que afectó sensiblemente la producción de alimentos y el mercado de trabajo, obstaculizando la lógica pluriactiva de las familias agropecuarias⁴³. Se registra un avance de la frontera agropecuaria sobre la base de incorporar grandes dotaciones de maquinaria que modifican la contratación de mano de obra de campesinos y asalariados. Asimismo, el avance de estas actividades se realizó a partir de otras producciones ganaderas y de cultivos industriales, caracterizadas por una demanda de mano de obra intensiva (Teubal, 2006; Ortega, 2009-12; Colina *et al.*, 2008). Finalmente, este proceso, que se ha expandido a nivel nacional, generó lo que se denomina como “pampeanización” de las economías regionales, expulsando productores de escasa rentabilidad, avanzando sobre montes nativos y comunidades indígenas. Esto trajo importantes consecuencias sobre la población rural con el proceso del éxodo rural-urbano, donde las y los habitantes migran hacia las ciudades intermedias y grandes centros urbanos en busca de mejores condiciones de vida y laborales (Murmis, 1994; Aparicio, 2005; Roman y Robles, 2005; Neiman y Bardomás, 2001; Benencia y Quaranta, 2006; Bisang, R. y Sztulwark, 2006).

43 Al respecto, diversos análisis censales dan cuenta de la reducción de explotaciones agropecuarias (EAPS) en el país, durante el proceso de expansión del cultivo de oleaginosas, mientras la superficie total cultivada se mantiene o, incluso, se incrementa. Entre otros: Soverna, 2021; Azcu y Ameghino y Fernández, 2019.

Haciendo foco en la situación de crisis sanitaria, la pandemia por COVID-19 vino a reafirmar de manera contundente los desequilibrios preexistentes en ese ámbito. El sistema sanitario en zonas rurales viene constatando una baja o nula existencia de políticas de acceso a la salud -que es un derecho consagrado constitucionalmente- en las distintas provincias del país. Si bien las zonas rurales, comunidades dispersas y/o localidades intermedias, generalmente cuentan con servicios básicos de atención inmediata; en situaciones de mayor riesgo, gravedad, o tratamientos prolongados los y las pacientes son trasladadas a nosocomios de mayor envergadura, comúnmente ubicados en ciudades cabecera de distrito (Alcoba *et al.*, 2021). Esta disposición de los servicios de salud restringe las oportunidades de acciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud. Y en la delicada situación de crisis sanitaria mundial operó como una amenaza y factor de desigualdad.

Estos procesos interpelan también la forma de explicar y conceptualizar lo rural. En este artículo se propone una mirada territorial que implica comprender a la ruralidad como ámbito de heterogéneas actividades, donde puede existir una preponderancia de los empleos o los ingresos no-agrícolas. A su vez, los límites que separan lo rural de lo urbano son cada vez más difusos, donde la transición territorial entre un ámbito y otro vuelve plausible identificar también territorios rururbanos y periurbanos (Llambi, 2013).

Desde esta perspectiva, el relevamiento realizado buscó captar la complejidad de la situación que viven las familias rurales del país -en un sentido amplio- durante el aislamiento social preventivo y obligatorio por COVID-19. Los resultados obtenidos, concuerdan con la afirmación sobre las desigualdades de base del sector rural que se dan más allá de la coyuntura pero que, no obstante, se vieron agravadas por la crisis sanitaria. Esto se evidencia, además, en las opiniones y percepciones que las y los informantes registraron específicamente en un espacio abierto en el instrumento de relevamiento, donde podían expresar lo que deseaban y que resultó de mucha riqueza para el estudio. A continuación se presentan los principales resultados de esta encuesta acerca de la ruralidad en el marco de la pandemia: accesos, derechos y vida cotidiana.

Gestión de la pandemia

Dentro de los temas de interés se buscó conocer las medidas y estrategias que las diferentes comunidades desarrollaron en el contexto de excepcionalidad del aislamiento social. Los cuestionarios fueron enviados durante los meses de mayo y junio del 2020, es decir, al inicio del aislamiento, por lo que una de las principales cuestiones a conocer fue la existencia de contagios en las localidades. Aproximadamente el 20 % de personas relevadas mencionó la presencia de casos, lo que corroboraba el bajo nivel de propagación del virus en zonas rurales al momento de realizado el estudio. Entre quienes refirieron afirmativamente, prácticamente la totalidad planteó que, en las pequeñas ciudades y comunidades rurales los casos no superaban las 10 personas.

En relación con el grado de acatamiento del aislamiento social como medida de prevención de contagios, los y las referentes señalaron que en las localidades hubo un respeto generalizado. En este marco, se les consultó si en las localidades se establecieron otras estrategias de control más allá de las decretadas por el Estado Nacional. Gran parte de las personas enumeraron diversos tipos de medidas para garantizar el acatamiento, entre las que se destaca la vigilancia permanente por parte de las fuerzas policiales; el control administrado de la circulación para actividades exceptuadas y, en el caso de la población en general, alternando la posibilidad de salidas a la vía pública según la terminación par o impar del número del documento nacional de identidad. También es mencionada como alternativa bastante extendida, el cierre de la localidad y en menor medida, el ejercicio de control de los mismos vecinos.

Un aspecto referido a la circulación, vinculada con la dinámica de vida de los pobladores rurales, es lo sucedido con las y los trabajadores migrantes. La migración como estrategia familiar se caracteriza por desplazamientos de diversa duración entre dos o más áreas productoras. Las y los trabajadores estacionales, combinan las ocupaciones en la agricultura con otros sectores como servicio, comercio, construcción y turismo. El ASPO coincidió con la etapa de cosecha de gran parte de los cultivos regionales, aunque estas actividades se vieron exceptuadas de la prohibición de circulación y continuaron bajo medidas de prevención y cuidado. Sin embargo, no se contempló que al concluir la labor de cosecha,

trabajadoras y trabajadores migrantes quedaron varados en diferentes puntos del país sin posibilidad de retorno a sus hogares.

Pese a la importancia que dicha estrategia ocupa en la vida de las familias rurales, no se advierten medidas específicas para la población migrante, más allá de las contempladas para la población en general. Excepcionalmente, por alguna cobertura mediática, se dio a conocer la vulnerabilidad que transitaban trabajadores y trabajadoras debido a las limitaciones de circulación interjurisdiccional. Se difundían imágenes de familias pernoctando en la intemperie en estaciones de ómnibus, a la espera de trámites administrativos y de traslado para retornar a sus provincias⁴⁴. Por este motivo, el estudio indagó sobre la existencia de trabajadores de la comunidad que se encontraran en tal situación. Al respecto, un 60 % manifestó conocer habitantes de la localidad que atravesaron dificultades para retornar o que se encontraban aisladas en otros sitios debido a la migración laboral. A la histórica situación de precariedad que dicho colectivo suele transitar, en pandemia se encontró con el agravante que el acceso a los programas de asistencias de ingresos (IFE) se vio obstaculizado, por encontrarse en tránsito, sin domicilio ni conectividad para tramitar este tipo de ayuda (Agenda Migrante 2020).

Aspectos sanitarios y acceso a la salud

La propagación mayormente urbana de este virus facilitó que las consecuencias no resulten de alta criticidad en zonas rurales, siendo allí mayores las dificultades del sistema de salud para disponer de atención e implementación de programas de prevención y cuidado. La carencia del sistema sanitario en equipamiento, infraestructura y recursos humanos implicó un riesgo adicional para la población rural, paralelamente a la escasa posibilidad de tratar otras afecciones. Vale señalar la correlación existente entre letalidad provocada por la enfermedad y edad de las personas que la padecen. En este sentido la pandemia mostró mayor mortandad en adultos mayores, siendo precisamente este segmento mayoritario en la ruralidad (Trpin, 2005).

44 Al respecto, se pueden observar las siguientes publicaciones: ANRed 13 de abril de 2020; ANRed 22 de abril de 2020; Vales, L. 13 de mayo 2020, p. 12.

Mediante el estudio se identificó la presencia territorial de centros de salud de distintos niveles de atención, aunque con variaciones respecto de sus características. Solo una mínima parte manifestó la falta absoluta de los mismos en su localidad. No obstante, la mayoría registró la existencia de impedimentos para llegar a los lugares donde se brinda el servicio de salud, sobre todo debido a las distancias que hay que recorrer (en algunas localidades alcanza 50 km o más). Estas dificultades se ven agravadas por las condiciones estructurales que caracterizan la ruralidad: falta de transporte y servicios públicos, caminos en mal estado o carencia de vehículos propios.

En relación con la frecuencia de atención de los servicios sanitarios, una parte de los y las referentes señaló que la misma era diaria (65 %), incluyendo sábados y domingos; otra parte (19 %) mencionó que era de lunes a viernes y el resto refirió solo los fines de semana, o bien, algunos días a la semana o del mes. Estos últimos enfrentaron niveles más altos de desprotección y riesgo por circulación del virus como por emergencia de otras patologías, al no brindar asistencia médica permanente y, en algunos casos, contar únicamente con enfermeras y enfermeros o agentes sanitarios. En general, prestaban una atención periódica, semanal, quincenal o -especialmente- mensual, modalidad conocida como rotación profesional o rondas médicas.

En relación con la complejidad del servicio, un 61 % identificó niveles medios de atención y guardia permanente. Mientras que, un 30 % sostuvo que las unidades de atención médica contaban con salas de cuidados intensivos, es decir, con salas de mayor complejidad, además de atención farmacéutica 24 horas y servicio de traslado en ambulancias.

El principal objetivo del ASPO era retrasar la propagación del virus para el acondicionamiento y fortalecimiento de la asistencia sanitaria. Ante la consulta realizada sobre las estrategias implementadas en ese sentido, el 60 % manifestó ausencia de medidas de acondicionamiento para la atención de pacientes con patologías COVID-19. Mientras que, un 59 % consideró la disponibilidad de insumos para evitar el contagio del personal sanitario y de la población en general.

Las campañas de divulgación para la prevención de la enfermedad estuvieron en los medios de comunicación ocupando un rol protagónico. Al respecto, un 73 % de las y los referentes encuestados, consideró la

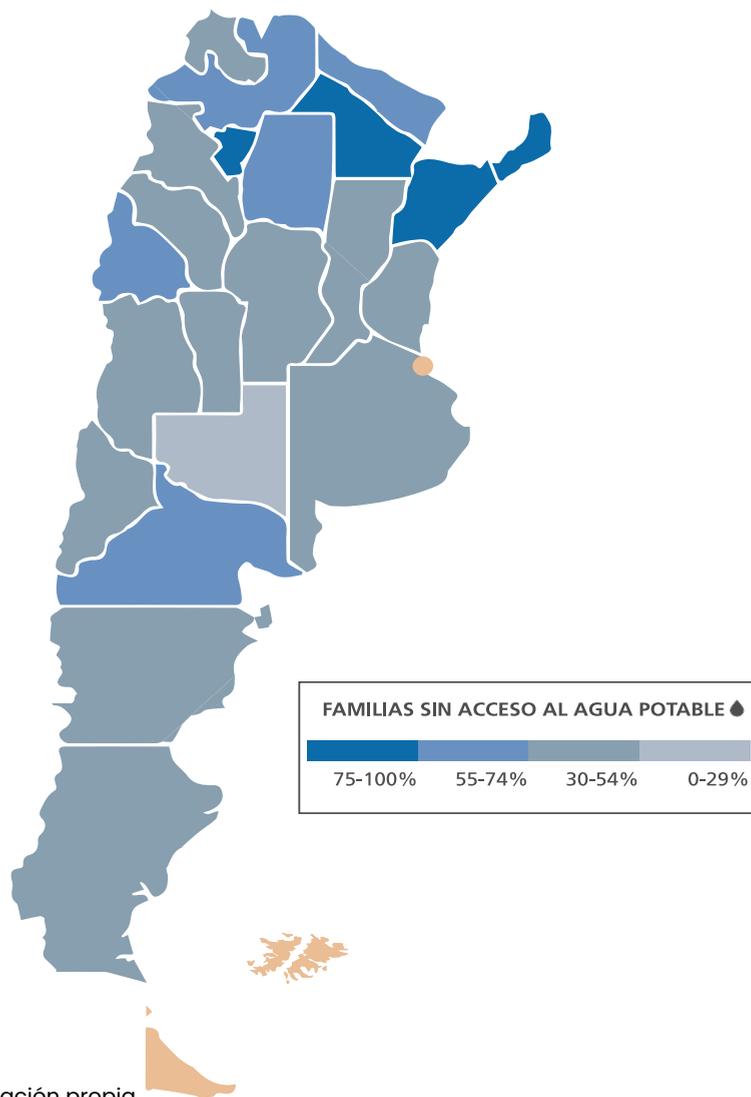
existencia de estas campañas en sus localidades. Muchas de las cuales, eran adecuadas a las particularidades de la ruralidad, teniendo en cuenta las problemáticas específicas como acceso a servicios -agua potable, transporte- medios de difusión disponibles, posibilidades para adquirir bienes e insumos.

Acceso a bienes de primera necesidad

Los desequilibrios estructurales regionales vinculados a la concentración geográfica y económica en determinadas zonas del país en lo referido a la producción de bienes de primera necesidad hacían suponer problemas para abastecer un país de grandes dimensiones. En las áreas rurales estos obstáculos se multiplican, por el acceso limitado debido al mal estado o falta de caminos, las distancias, infraestructura precaria o ausente. Este apartado plantea las dificultades en la provisión de artículos de primera necesidad en relación con las medidas del ASPO.

En primer término, cabe destacar el limitado acceso al agua potable para consumo en diferentes regiones del país. El 51 % de los respondientes afirmaron conocer la existencia de familias en sus localidades que no contaban con este recurso de manera regular y en cantidad suficiente. Las zonas donde se advierte mayor déficit al respecto son el NEA (provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones) y el NOA (75 y 61 % respectivamente). Particularmente, en el caso de los pueblos originarios se destaca un mayor porcentaje con dicha dificultad: el 69 % de quienes se autopercebían perteneciente a una comunidad indígena sostuvo que no acceden al agua potable de manera regular.

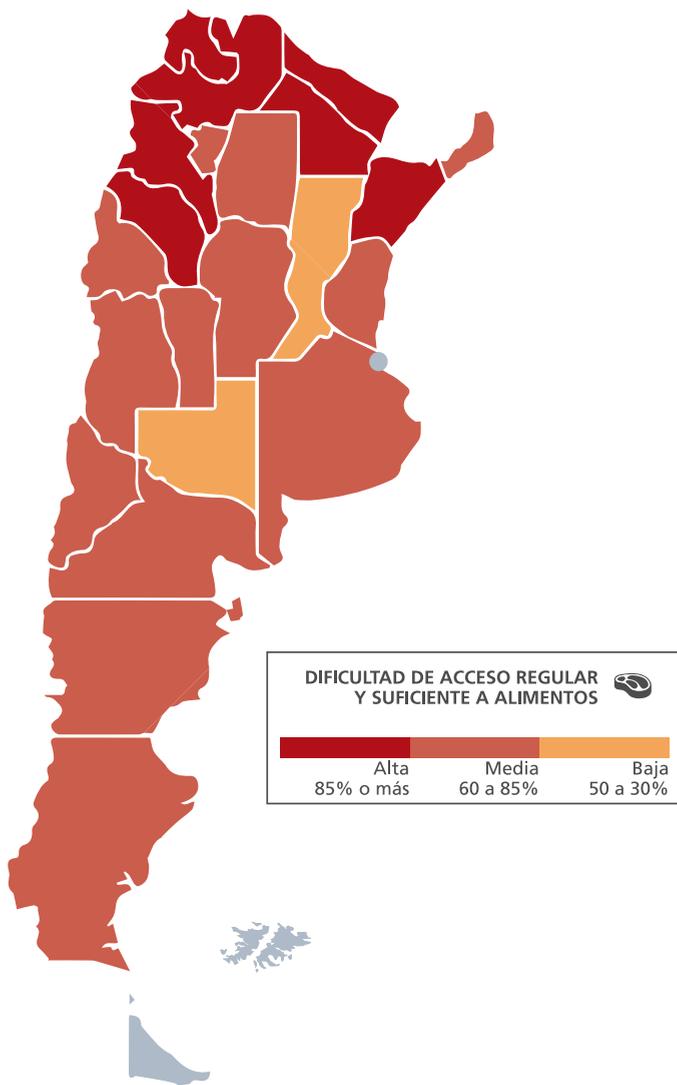
Figura 2. Familias sin acceso al agua potable



Fuente: Elaboración propia.

También se relevó información sobre acceso a bienes de primera necesidad como alimentos, artículos de limpieza, remedios e insumos farmacológicos y disponibilidad de artículos de protección y cuidado. En relación con alimentos, los y las referentes señalaron que se presentaban problemas para obtener estos productos de forma regular y en cantidad suficiente. Principalmente porque no llegaban a su localidad; porque no podían acceder ellos mismos a las localidades donde se solían abastecer; porque no había producción y escaseaban los artículos, entre otros motivos. Sobre los productos de limpieza, el 59 % manifestó que accedía, mientras el 41 % dijo que no llegaban elementos de limpieza de manera regular y en cantidad suficiente a sus localidades. Al preguntar en relación con los motivos del desabastecimiento de estos productos, se mencionó la compra compulsiva y la no provisión de los productos a la localidad, entre otras cuestiones.

Figura 3. Dificultad de acceso a alimentos



Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al aprovisionamiento de productos esenciales para salud, se consultó acerca de la disponibilidad de remedios o insumos farmacológicos. Específicamente, se preguntó si había acceso a elementos de protección básicos tales como barbijos, tapabocas, alcohol, guantes y otros. En relación con remedios e insumos farmacológicos, un 45% manifestó que los recibía, mientras un 26% indicó dificultades para disponer de forma regular y suficiente. Sobre los artículos de protección, se advirtió que el 51% de los casos expresó no contar en modo regular y en cantidad suficiente, a la vez que, un 48% consideró que sí. Al igual de lo que sucede con otros bienes, los motivos por los cuales no disponían de estos fueron limitaciones para llegar hasta las comunidades, debido a la interrupción para circular como a la imposibilidad de trasladarse hacia localidades en las cuales, generalmente, se abastecían de esos productos. Esta realidad, puso en evidencia el modo en que la producción de bienes está concentrada en las principales áreas urbanas industriales del país, distante de aquellas zonas periféricas con escaso desarrollo de su matriz productiva.

La disponibilidad de combustible fue otro de los aspectos indagados en este apartado, como también las causas del desabastecimiento. Un porcentaje mayor al 50%, consideró disponer de combustible en modo regular y suficiente, en tanto un 43% manifestó padecer faltantes. A diferencia de lo que sucedió con otros bienes de primera necesidad, las localidades del centro y sur del país fueron las más afectadas.

Se indagó también sobre los principales obstáculos en relación con la compra de bienes de primera necesidad. Cabe señalar que en Argentina es común en las áreas rurales no contar con cajeros automáticos ni servicios de pago electrónico. Alrededor del 27% de las personas encuestadas mencionó no tener inconvenientes para la compra de insumos; del resto, un 30% manifestó falta de cajeros automáticos como principal impedimento. Luego, se mencionó ausencia de medios de pago electrónicos (26%) y dificultad para trasladarse a los sitios de venta (25%). Además de la escasez de cajeros automáticos, el 16% mencionó la falta de reposición de dinero; finalmente, solo un 2% hizo referencia a la carencia de ingresos del grupo familiar para acceder a bienes de primera necesidad.

Por último, una de las principales preocupaciones fue el aumento de precios, en especial en los negocios de proximidad. Casi la totalidad de los encuestados (97%) consideró que se vieron afectadas por el

encarecimiento de los alimentos. En cuanto a los rubros más perjudicados por esta situación, el 26 % de las personas indicó alimentos, el 24 % productos de limpieza, un 22 % elementos de protección personal, un 18.5 % medicamentos. El rubro “combustibles” fue el que menos personas seleccionaron (8.7 %), pese a que este periodo coincidió con una caída global del precio de los combustibles, debido a la recesión productiva generada por la pandemia.

Educación en pandemia

En todo el territorio nacional, apenas iniciado el ciclo lectivo 2020, la primera medida para evitar la circulación del virus fue la interrupción de clases en los diferentes niveles educativos. A partir de ese momento se implementaron diversas modalidades, desde la máxima autoridad educativa (Ministerio de Educación de la Nación). La primera o más difundida fue el envío de material impreso por grados o niveles para desarrollar tareas en los domicilios particulares. También, se utilizaron medios de comunicación como radio y televisión para la difusión de contenidos y se implementaron estrategias digitales en diversas plataformas en línea para el dictado de clases. Estas medidas, obligaron a atender problemas asociados con la disponibilidad de soportes tecnológicos y conectividad. Por ejemplo, las empresas de telefonía móvil e Internet no podían interrumpir el servicio, considerado en dicho contexto como prioritario.

Se indagó acerca de la situación general que atravesaron las familias rurales en relación con el acceso y modalidad de continuidad pedagógica en contexto de cuarentena. En ese sentido, se abordó lo referido a la posibilidad de seguir con el ciclo lectivo, así como la forma en que los establecimientos plantearon su estrategia para cumplimentar con los contenidos curriculares.

Preocupaba principalmente la continuidad escolar por diversas dificultades estructurales del medio rural. En primer término, el plantel docente y tutores a cargo del acompañamiento escolar debían contar con las capacidades y equipamiento necesario para afrontar las nuevas modalidades de enseñanza. Esto implicaba en la ruralidad el agravante asociado con un servicio de conectividad deficitario e incluso inexistente: *Internet en los pueblos es de muy mala calidad y la falta de acceso a las familias para poder seguir con tareas de la educación.* En segundo

término, como dificultad adicional, se encuentra el hecho que los docentes a cargo, generalmente, tienen su domicilio en otras localidades distantes de las comunidades rurales de referencia.

En el relevamiento, las personas manifestaron que la mayor parte de las familias accedía al servicio de Internet, ya sea a través de *wifi* (54 %) o por red móvil (37%). En cuanto a equipamiento, más de la mitad del total de las personas encuestadas identificó al teléfono celular como el principal dispositivo de acceso a Internet para diferentes usos, incluyendo el educativo. La mayor parte de los hogares rurales no contaba con el equipamiento necesario y en la mayoría de los casos solo se disponía de un teléfono celular por familia.

Otra dificultad que presentó la continuidad educativa durante el aislamiento fue la necesidad de que las familias se ocuparan de acompañar y asistir en su formación a las y los estudiantes, dado que el contacto con las y los docentes había disminuido. Sobre esto, el 85 % de las personas manifestó “media” o “alta” dificultad por parte de las y los adultos de la comunidad para realizar acompañamiento de las tareas escolares, por desconocimiento de las herramientas virtuales y acceso deficitario a la tecnología. A eso se sumó la falta de comprensión de las tareas por quienes quedaron a cargo de la tutoría escolar en el hogar y la falta de tiempo para destinar a dichas actividades. Asimismo, se expresó *poco interés en los alumnos por realizar en el hogar las actividades escolares*, en un contexto en el cual fue mayor la dificultad para comunicar y acordar el envío de la planificación docente, así como las exigencias a nivel familiar en todo sentido.

De esta manera, con la interrupción de la actividad escolar en los establecimientos, se vivencia una sensación de mayor aislamiento: *En este lugar que es muy pequeño, la falta de asistencia escolar genera mucho aislamiento; en la zona rural no se dispone de wifi y en algunos casos ni siquiera de señal de celular, y todo pasa hoy por estar conectados*. Agravado por la dificultad de acceso a las TIC que restringió el alcance a políticas públicas de contención; contribuyendo, a profundizar la desigualdad que supone “vivir en el campo”. Además, la pobreza e indigencia estructural en el país se agravó por la pandemia y las medidas del ASPO, siendo principalmente afectadas las niñeces, adolescencias y juventudes.

Impacto económico y acceso a políticas públicas de emergencia

El impacto económico debido a la suspensión de actividades no prioritarias en el marco del aislamiento se puso de manifiesto de manera reiterada por parte de los y las referentes locales, ya que ello implicó la pérdida de empleos y la reducción de los ingresos en las familias. El grupo más afectado por estos cambios fue el de las y los trabajadores más precarizados, dentro del cual se destacan las personas más jóvenes. En términos generales, los referentes consultados, consideraron que los ingresos de las familias mermaron, a pesar de que el sector agropecuario mantuvo un relativo desarrollo de actividades y empleo de los trabajadores.

La economía familiar que mayor afectación manifestó es aquella que se vincula con feriantes y artesanos, a quienes se interrumpió el ingreso por el cierre de los locales y espacios de venta. Asimismo, se hizo mención del impacto de las actividades asociadas con el traslado interjurisdiccional de trabajadoras y trabajadores. Dentro de este segmento, se indicó que las y los mayormente perjudicados fueron las y los jóvenes. El contexto de subida generalizada de precios limitó el poder adquisitivo, agravando la situación de los hogares con ingresos insuficientes. A esto se agrega que la situación desencadenó especulación comercial y desabastecimiento, generando nuevos incrementos de precios, en perjuicio de las familias⁴⁵. Además, en el caso específico de las y los adultos mayores, la situación de crisis se agudizó por las dificultades para trasladarse a las entidades bancarias a realizar gestiones y cobros de beneficios previsionales.

En esas condiciones, fue muy importante acceder a algunos de los beneficios puestos a disposición para determinados sectores. Un 77 % mencionó que se pudo alcanzar políticas públicas de emergencia (subsidios y créditos) en general. La principal ayuda a la que se hizo referencia (75 %) fue la que provino del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), dispuesto por el Gobierno Nacional para respaldar a los hogares ante la dificultad financiera. El mismo estaba destinado a trabajadoras y trabajadores monotributistas⁴⁶

45 Entre las respuestas o el modo de enfrentar dicha situación, las personas manifestaron diferentes estrategias para subsistir o mejorar la economía doméstica; en su mayoría vinculadas con la provisión de alimentos, autoproducción y el desarrollo de nuevos emprendimientos.

46 Hace referencia al régimen simplificado para pequeños contribuyentes que se crea en el año 1998 y es administrado por AFIP. El aporte mensual incluye obra social y componente jubilatorio. Para más información ver: <https://www.anses.gob.ar>

e informales de menores recursos, segmentos o categorías, donde gran parte de las y las habitantes de la ruralidad se encuentran comprendidos. Sin embargo, el 23 % expresó dificultades en sus localidades para acceder al mismo. Entre las razones limitantes, se mencionan: desconocimiento o falta de información general sobre tales opciones (37%) y dificultades para gestionarlas dada la modalidad virtual de la mayoría de los trámites (33 %), sea por falta de manejo de las herramientas o de asesoramiento para concretarlos. Otras causas fueron la falta de acceso a Internet para la realización de trámites (16 %) y no contar con la totalidad de requisitos establecidos (11 %). Por último, con un 3 %, se mencionó que hubo casos en que no se cobró, pese a haber realizado los trámites correspondientes.

Un aspecto a resaltar en la realidad de las comunidades rurales, y que se profundizó en el contexto de aislamiento, fue sin duda la carencia de asistencia gubernamental que facilite el acceso a trámites en modalidad virtual. Una estrategia que día a día se expande en la mayoría de las instituciones y organismos y que implica no solo la necesidad de acceso al servicio de Internet sino también desarrollar aquellas capacidades para el uso de estas herramientas. En este sentido, el 59.7 % de las y los entrevistados mencionó no haber sido asesorado, mientras que un 40 % expresó haber recibido asistencia al respecto.

Vivir en el campo: percepciones sobre el aislamiento

La política de aislamiento generó tensiones en las áreas rurales, ya que, si bien fue menor la propagación del virus durante la fase inicial respecto de las urbanas, las medidas se implementaron en todo el territorio, con diferentes impactos. A partir del espacio abierto para comentarios y reflexiones en el instrumento de relevamiento, fue posible recolectar opiniones y percepciones sobre lo que se estaba experimentando en comunidades rurales.

Por un lado, se encontraron posturas a favor del ASPO, que adherían al objetivo de proteger la salud y salvar vidas, de evitar el colapso sanitario y poder brindar asistencia a familias y empresas, en un contexto de emergencia económica y financiera del país. Por otro lado, una minoría se expresó abiertamente en desacuerdo con las medidas de aislamiento, planteando que las mismas eran utilizadas con fines políticos, asociándose con la incapacidad de la dirigencia para conducir el país y su economía.

Asimismo, se evidenció desacuerdo con las modalidades de gestión de la política local (gobiernos provinciales, municipios, comisiones municipales) acerca de la manera de administrar la circulación de personas y bienes; así como la escasa y descoordinada intervención territorial para solucionar problemas contingentes a la pandemia.

Dentro de las apreciaciones más recurrentes sobre la repercusión de la pandemia y el aislamiento en el ámbito rural, se destaca la mención a las insuficientes condiciones de infraestructura y aislamiento que vivencian las comunidades, problemáticas históricas que esta coyuntura de excepcionalidad profundizó: *vivir en la zona rural significó quedar aún más relegados de todo; vivimos en zonas aisladas y precarias, y esta enfermedad nos aisló más; las ineficacias previas se acrecentaron en esta situación.*

A las dificultades propias de las zonas rurales, se sumaron complicaciones para realizar gestiones o trámites, abastecerse de bienes de primera necesidad y trasladarse a ciudades de mayor importancia: *esta es una pequeña localidad de aproximadamente 600 habitantes, donde para trámites bancarios, correo, farmacia, se deben trasladar a la ciudad cabecera del distrito; [la localidad] con caminos a veces intransitables por lluvia, 15 a 20 km.*

Se percibió en recurrentes intervenciones, la sensación de desatención: *...nos fijamos mucho en la ciudad pero en la población rural no llega nada [...] hay mucha gente mayor que vive aislada; estamos ignorando toda propuesta o acción del municipio [...] no estamos preparados [...] para evacuar necesidades [...] recibir información; [la provincia] tiene más del 70 % de su población en ciudades grandes con más acceso a servicios, las poblaciones agrícolas o de campo están desprotegidas; el interior siempre queda aislado, sin conectividad, asesoramiento suficiente y soluciones inmediatas.*

La falta de contención era asociada con la debilidad en la representación gubernamental de las localidades más chicas: *Los pequeños pueblos sin representación municipal (delegados) no tienen una autoridad de referencia y quedaron a la deriva en materia de acceso a alimentos, salud y educación.* Asimismo, en el contexto de pandemia, la falta de información relativa a la situación de familias aisladas, particularmente del segmento de adultos mayores, constituyó una de las principales preocupaciones:

hay mucha gente que desde que está la pandemia no se las ven, no se sabe si tienen las cosas necesarias, ayuda medicinal, alimentos, etcétera.

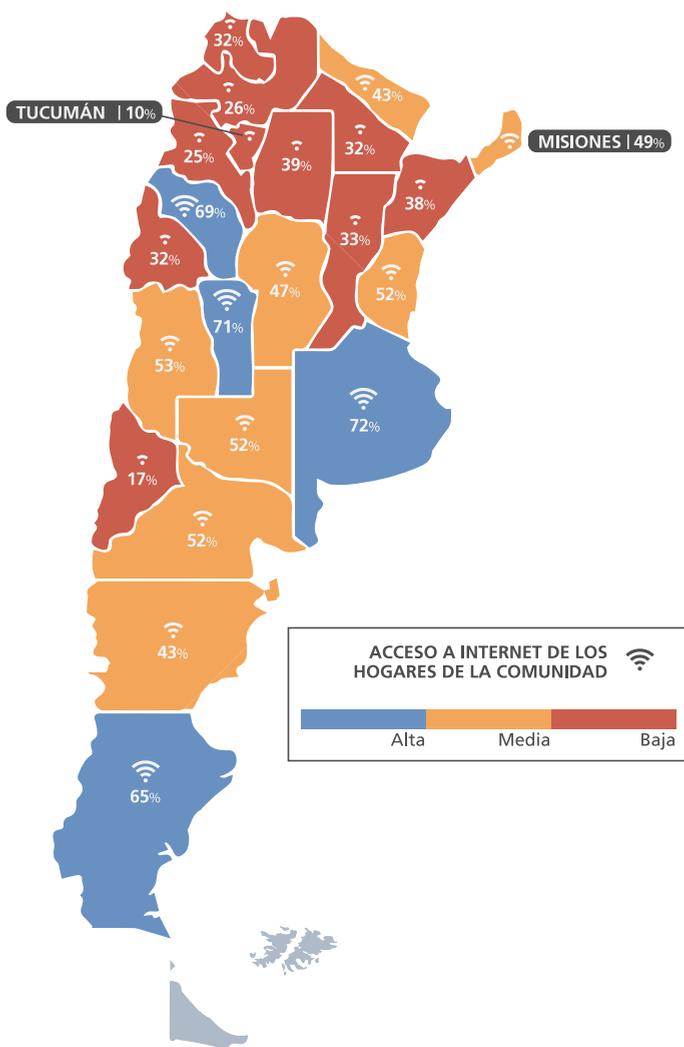
La dificultad de acceso o falta de información restringe a su vez, el acceso a las políticas públicas de contención. En la mayoría de las zonas rurales no se dispone de *wifi* y en algunos casos ni siquiera de señal de celular. Según lo manifestado *todo pasa hoy por estar conectado a Internet; en la zona netamente rural todo se complica, por las inclemencias climáticas, por el estado de los caminos, por las distancias, por no tener posibilidades ni conocimientos, falta información, asesoramiento y acceso a Internet. Todo requiere de esto último y no hay posibilidades, ANSES⁴⁷, AFIP⁴⁸, educación.*

Sin duda, la falta de Internet en el transcurso de la pandemia fue el principal obstáculo para poder realizar actividades cotidianas, así como garantizar el ejercicio de derechos. En los casos donde su acceso estaba posibilitado, los hogares pudieron amortiguar los impactos económicos, realizar compras, acercar y facilitar el vínculo con la escuela y la formación, contribuir a sobrellevar el aislamiento, a través del ocio y la recreación. Al respecto, se mencionó que *desde hace 10 años, ARSAT empezó la obra para conectar el pueblo a la red federal de fibra óptica, pero todavía sigue sin novedad.* En el mismo sentido, se reiteró como prioritaria la necesidad de mejorar la infraestructura de caminos, que favorezca la comunicación con los centros urbanos, una demanda de larga trayectoria.

47 Refiere a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que lleva adelante la ejecución de políticas del Estado Nacional en materia de seguridad social. Administra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Entre sus funciones están: otorgar y pagar de jubilaciones y pensiones; abonar las Asignaciones Familiares a trabajadores activos, desocupados, jubilados y pensionados; gestionar prestaciones por desempleo; administra el programa AUH (Asignaciones Universal por Hijo y por Embarazo para Protección Social), entre otras prestaciones. Para más información ver <https://www.anses.gob.ar>

48 Refiere a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo que realiza la ejecución de la política tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de la seguridad social de la Nación. Para más información ver: <https://www.afip.gob.ar/landing/default.asp>

Figura 4. Acceso a Internet en los hogares por provincia



Fuente: Elaboración propia.

Estas dificultades y la sensación de desprotección contribuyen, al parecer de las y los encuestados, en una profundización de la desigualdad por “vivir en el campo”.

Sobre esta base, predominó un consenso generalizado acerca de la importancia de un Estado presente, junto al acompañamiento de organismos públicos y privados. Sugirieron pedidos de incrementar la asistencia estatal, *no olvidar, tener en cuenta* a los segmentos poblacionales de mayor riesgo, dentro de los cuales se destacan las y los adultos mayores; priorizar de la atención y seguimiento en la evolución de estos grupos; generar modalidades de ayuda para la gestión virtual de beneficios, para la adquisición de bienes de primera necesidad, entre otros.

Una de las principales demandas estuvo relacionada con los ingresos, en función de la precaria situación económica. Específicamente, por dificultades emergentes de la modalidad virtual de acceso a políticas de asistencia, requisitos o problemas vinculados al trámite. Esta situación que cobró mayor notoriedad con la pandemia dio cuenta de la escasa presencia institucional en los territorios rurales, ampliando la brecha de desigualdad en las posibilidades de ejercer determinados derechos.

Se registraron reclamos por fortalecer la asistencia a las infancias y juventudes rurales, ya que se considera que *no cuentan con demasiada alternativa para desarrollarse en su medio, por lo que es muy notable el desarraigo*. Al respecto, se sugirió implementar propuestas para favorecer la socialización, la recreación y el ocio. Asimismo, se demandaron políticas focalizadas hacia productores jóvenes que habiliten el desarrollo de actividades agropecuarias. Se pedía por acceso a créditos para reactivar la producción, además de profundizar la asistencia directa social (alimentos, ropa).

Las demandas se extendieron a las problemáticas de las familias rurales en general y de aquellos trabajadores precarios que por esta condición quedan excluidos de beneficios estatales y más expuestos a la situación de emergencia. Otro reclamo fue contemplar *a quienes presentan relación de dependencia pero que cuentan con ingresos muy por debajo de lo mínimo*. La agregación de efectos socioeconómicos de la pandemia y el aumento de los precios, ya mencionados generó que las peticiones se dirigieran hacia mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Esto da cuenta que, en el presente la condición de formalidad

en el empleo no constituye garantía para mantener al grupo familiar, a la vez que impide solicitar asistencia estatal, subsidio o crédito, puesto a disposición en pandemia.

Otros pedidos, quizás más específicos, tenían que ver con equipar al sistema sanitario, mejorar los hospitales, disponer de mayor presupuesto para insumos e incrementar la presencia de profesionales de diversas especialidades en forma periódica para asistir a la población rural. Por último, se manifestó la importancia de promover el acceso a determinados servicios públicos, como por ejemplo gas natural.

Para alcanzar estas mejoras, se percibe como prioritario que las y los representantes locales tengan mayor capacidad de participación en las instancias decisorias provinciales y nacionales, haciéndose eco de las necesidades de los pequeños poblados.

Aprendizajes e iniciativas en tiempos de crisis

Más allá del crítico escenario que se percibía, hubo quienes visualizaron oportunidades –algunas poco aprovechadas– que habilitaba la situación particular que se estaba atravesando: *la pandemia fue positiva para el arraigo de las comunidades de volver al campo; la autoproducción de alimentos (huertas) creció muchísimo en mi ciudad; no se aprovechó este momento para fomentar la producción para abastecimiento local.*

Otro de los aspectos destacados como positivos de esta situación, fue la manifestación de lazos solidarios y de cooperación: *en la localidad [...] actuaron de inmediato en tomar medidas de prevención y eso ayudó a tener conciencia social. Hubo permanentemente grupos voluntarios de solidaridad y atención a los más vulnerables; en mi pueblo hay gran acatamiento del ASPO, hay conciencia y solidaridad; esta pandemia servirá para ser solidarios; la pandemia nos llevó a producir nuestros propios alimentos, a ser solidario con el vecino, a no ser tan consumistas y disfrutar a la familia; surgieron muchas iniciativas solidarias sin personería jurídica, asociaciones sin fines de lucro que simplemente se organizaron y rápidamente atendieron urgencias de la población más vulnerable.* Es decir, si bien primaron los sentimientos de aislamiento e impotencia, paralelamente se destacaron las acciones solidarias, el encuentro y la colaboración por otro más vulnerable.

Asimismo, se mencionaron los beneficios y bondades que brinda habitar en zonas rurales: *las personas que tenemos la posibilidad de vivir en el campo o tener una huerta, no sufrimos tantas las consecuencias como en las grandes ciudades y que la pandemia nos llevó a producir nuestros propios alimentos, a ser solidarios con el vecino, a no ser tan consumistas y disfrutar a la familia.* Se valoró el accionar solidario de instituciones sociales y religiosas profundizando su labor de asistencia comunitaria con elementos de seguridad e higiene, alimentos. Por ejemplo, se comentó un caso en el que *semanalmente voluntarios [...] llevan alimentos para aproximadamente 100 familias.*

Las respuestas obtenidas hicieron hincapié en el papel del Estado en el contexto de emergencia sanitaria, en vinculación a los grupos más afectados por esta situación. Si bien se puso en valor el accionar del mismo en los territorios rurales, no significó dejar de soslayar las falencias: *no hubo visitas, ni ningún tipo de comunicación por parte del municipio para conocer el estado de situación de los pobladores rurales; no se crearon políticas públicas propias para la zona en este contexto particular.* De todas formas, también se reconoce el rol que debe asumir la población, más allá del Estado: *debemos ser los ciudadanos los responsables de cuidarnos, tener empatía y ser solidarios; y no estar esperando que el Estado nos solucione la vida.* Incluso algunas propuestas indicaban la necesidad de fortalecer las propias capacidades comunitarias para asistir y generar estrategias de prevención. En el mismo sentido, se instó que el Estado trabaje *con voluntarios instruidos y capacitados para preservar la salud de los vecinos, dispuestos a recorrer y evacuar necesidades e información.*

Hubo consenso respecto de apoyar a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que promuevan el desarrollo comunitario, a partir del uso de los recursos locales, su encadenamiento y agregado de valor. Se destacó lo significativo que resulta poder contar con organismos técnicos para fortalecer las actividades agropecuarias y generar capacidades en la autoproducción de alimentos: *desde la institución que trabajo se apoyó a la tarea de producción y entrega de semillas, pollitas ponedoras, y también se continuó con el acompañamiento a los productores; proponer que podamos auto-alimentarnos proyectando huertas comunitarias.*

Conclusiones

En términos generales, en Argentina la pandemia profundizó problemáticas estructurales e históricas de la ruralidad: escasa infraestructura, aislamiento de algunos territorios, deficiencia en el servicio que brinda el sistema de salud y educativo; fragilidad de los sistemas agroalimentarios, tecnologías deficientes, obstáculos para acceder al financiamiento e inversión, falta de oportunidades para acceder al trabajo decente; entre otras problemáticas.

Con el agravamiento de la pobreza e indigencia, donde los principales grupos afectados son las niñeces, adolescencias y juventudes, preocupó especialmente la continuidad escolar. Esto a razón de diversas dificultades: escaso acceso a las tecnologías, deficitario servicio y/o equipamiento; hogares que no cuentan con los instrumentos adecuados y en cantidad suficiente; falta de comprensión de las tareas por quienes están a cargo del acompañamiento escolar en el hogar; desconocimiento en el uso de herramientas virtuales o falta de tiempo para destinar a dichas actividades. El cierre de los establecimientos educativos, en muchas comunidades, profundizó el aislamiento, agravado por la dificultad de acceder a las TIC.

El otro punto que, se pone en relevancia en este estudio, es la importancia de la institucionalidad estatal, principalmente la presencia y fortalecimiento de los gobiernos locales y sus mecanismos de asistencia hacia los territorios rurales que se perciben como marginales respecto de las decisiones de políticas públicas. Las medidas del ASPO y sus consecuencias negativas pusieron de relieve las limitadas capacidades de los gobiernos más próximos para garantizar derechos y acceso a determinados bienes y servicios. Esta situación, fue en detrimento del ánimo de la población, que percibe una profundización del sentido de aislamiento característico de los ámbitos rurales y muestra la desarticulación entre distintos niveles de gobierno, siendo municipios y localidades periféricas las más afectadas.

Este contexto global compromete aún más a las sociedades y los Estados a diagramar estrategias que mejoren el hábitat rural y promuevan la integración de las y los habitantes de la ruralidad como sujetos de política pública. Sobre la base de un desarrollo planificado con equidad, es que habitar la ruralidad puede ser una alternativa, o bien una elección que propicie mejoras en la calidad de vida.

Referencias bibliográficas

- Abeles, M., Pérez, E. y Porcile, G. (2020). La crisis del COVID-19 y los problemas estructurales de América Latina y el Caribe: responder a la urgencia con una perspectiva de largo plazo. *Revista CEPAL*. Edición Especial.132.
- Agencia de Noticias Redacción - ANRed. (13 de abril de 2020) *Trabajadores golondrina: "nos dejaron abandonados como los perros"*. Trabajadores golondrina: «nos dejaron abandonados como los perros» – ANRed
- Agencia de Noticias Redacción - ANRed. (22 de abril de 2020). *A un mes de cuarentena, todavía hay trabajadores golondrina varados en Mendoza*. <https://www.anred.org/2020/04/22/a-un-mes-de-cuarentena-todavia-hay-trabajadores-golondrina-varados-en-mendoza/>
- Agenda Migrante. (2020). *Informe Final sobre la situación de la población migrante/ extranjera en Argentina ante el avance del coronavirus*. <https://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8238>
- Alcoba, L., González, L., Chavez, M., Salatino, M., Quiroga, M. y González, M. (2021). *Aislamiento social y pandemia en la ruralidad argentina: una aproximación a la situación de familias y jóvenes*. Ediciones INTA. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/154911/CONICET_Digital_Nro.9fc3170b-afbc-41af-9621-a40ea5729ecc_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Aparicio, S. (2005). Trabajos y trabajadores en el sector agropecuario de la Argentina. En N. Giarracca y M. Teubal (coord.). *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad*. Alianza Editorial
- Arceo, E. (2003). *Argentina en la periferia próspera. Renta internacional, dominación oligárquica y modo de acumulación*. Universidad Nacional de Quilmes.
- Azcuy, E. (2014). Durmiendo con el enemigo: capitalismo y campesinado en Argentina. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, (40), 5-35. <http://www.ciea.com.ar/web/wp-content/uploads/2016/11/RIEA-40-01.pdf>
- Azcuy, E. y Fernández, D. (2019). El Censo Nacional Agropecuario 2018: visión general y aproximación a la región pampeana. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, (51), 5-36. ISSN 1853 399X - E-ISSN 2618 2475
- Azcuy, E. y Martínez, G. (2012). Producción agrícola, estructura socioeconómica y acción colectiva en la pampa húmeda argentina (1991-2010). *ALASRU (Nueva época)*,(6), 157-207.
- Benencia, R. y Quaranta, G. (2006). Mercados de trabajo y relaciones sociales: la conformación de trabajadores agrícolas vulnerables. *Sociología de Trabajo (Nueva época)*, (58). Siglo XXI.
- Bisang, R., Sztulwark, S., Lavarello, P. y Gutman, G. (2006). Introducción Tecnologías de la vida y vida de las tecnologías: un desafío para el desarrollo de la economía argentina, en R. Bisang, G. Gutman, P. Lavarello, S. Sztulwark y A. Díaz (comps), *Biotecnología y Desarrollo. Un modelo para armar en la Argentina*, Prometeo y UNGS Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020.

- Colina, P., Tálamo, A., Pais, A., Barbera, M., Yudi, J. y Cravero, S. (2008). *Análisis de los impactos de la expansión de la frontera agraria en la región del Chaco Salteño*. Trabajo de Investigación N° 1647. Salta: CIUNSa. Mimeo. http://eprints.natura.unsa.edu.ar/129/1/Colina_S_Analisis_Impactos.pdf
- Decreto Nacional 297/2020. *Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)*. <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320>
- El Gobierno flexibilizó el acceso a créditos de Tasa Cero para monotributistas: todo lo que hay que saber. *El Cronista*. <https://www.cronista.com/economia-politica/el-gobierno-flexibilizo-el-acceso-a-creditos-de-tasa-cero-para-monotributistas-todo-lo-que-hay-que-saber/>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). *Trabajo e ingresos. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH)*. N° 1. Cuarto trimestre de 2019. Informes técnicos. Vol. 4, N° 53.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). *Condiciones de vida. Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos*. N° 4. Segundo semestre de 2019. Informes técnicos. Vol. 4, N° 59.
- Kessler G. (2020). *Relevamiento del impacto social de las medidas del Aislamiento dispuestas por el PEN*. Comisión de Ciencias Sociales COVID-19 de la Unidad Coronavirus COVID-19. https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Informe_Final_COVID-Cs.Sociales-1.pdf
- Llambí, L. (2013). Procesos de transformación de los territorios rurales latinoamericanos: los retos de la interdisciplinariedad. *Eutopía. Revista De Desarrollo Económico Territorial*, (3), 117-134. <https://doi.org/10.17141/eutopia.3.2011.1022>
- Montequin, R. (2015). *Turismo rural y género en los departamentos de Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres*. UDELAR
- Murmis, M. (1994). *Incluidos y excluidos en la reestructuración del agro Latinoamericano*. Debate Agrario, N° 18. CEPES.
- Neiman, G. y Bardomás S. (2001). Continuidad y cambio en la ocupación agropecuaria y rural de la Argentina. En Neiman, G. (Compilador). *Trabajo de campo. Producción, tecnología y empleo en el medio rural*, (12-30). CICCUS.
- Ortega, L. E. (2009-12). ¿Qué es la expansión de la frontera agropecuaria? Aproximación al caso de Chaco. En *Documento del CIEA* N° 6. 87-109.
- Quaranta, G. (2017). *Estrategias laborales y patrones migratorios de trabajadores agrícolas de hogares rurales de Santiago del Estero*. Desarrollo Económico, Vol. 57, No. 221
- Reboratti, C. (2006). La Argentina rural entre la modernización y la exclusión. En Geraiges de Lemos, Amalia Inés, Arroyo, Mónica y Silveira, María Laura (Comp.) *América Latina. Cidade, campo e turismo*. CLACSO. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/lemons/10reborat.pdf>
- Reboratti, C. (2010). Un mar de soja: la nueva agricultura en Argentina y sus consecuencias. *Revista de Geografía Norte Grande*, 45, 63-76.
- Rofman, A. y Romero, L. (1997[1973]). *Sistema socio-económico y estructura regional en la Argentina*. Amorrortu editores.

- Román, M. y Robles, D. (2005). *Avances y retrocesos de las explotaciones familiares. Algunos datos y nuevos cuestionamientos para la provincia de Buenos Aires*. Anales de las Cuartas Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales.
- Soverna, S. (Coordinación general). *La Argentina agropecuaria vista desde las provincias: un análisis de los resultados preliminares del CNA 2018*. IADE; (ISBN 978-987-47691-2-1). https://www.iade.org.ar/system/files/6_giberti.pdf
- Teubal, M. Expansión del modelo sojero en Argentina. De la producción de alimentos a los commodities. En *Realidad Económica* N°220 mayo-junio de 2006, 71-96. IADE. (ISSN 0325-1926). <https://www.iade.org.ar/articulos/expansion-del-modelo-sojero-en-la-argentina> de#:~:text=Se%20trata%20del%20boom%20de,servicios%20de%20la%20deuda%20externa
- Trpin, V. (2005). El desarrollo rural ante la nueva ruralidad: algunos aportes desde los métodos cualitativos. *Revista Antropólogos iberoamericanos en red*. 42, 1-15.
- Vales, L. (2020). *Jujuy y Salta son las que ponen más trabas para su regreso. Coronavirus: más de 300 trabajadores golondrina están varados en seis provincias*. <https://www.pagina12.com.ar/265397-coronavirus-mas-de-300-trabajadores-golondrina-estan-varados>